

Individualización de Audiencia de lectura de sentencia.

Fecha	Rancagua, cinco de marzo de dos mil veinticuatro
Magistrado	CAROLINA GARRIDO ACEVEDO
Fiscal	MAXIMILIANO MARIÁNGEL PUGA
Defensor	MABEL MEDINA PÉREZ
Hora inicio	12:18 PM
Hora termino	12:22 PM
Sala	Sala 2
Tribunal	Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua.
Acta	CCR
RUC	2100254341-6
RIT	721 - 2021

Actuaciones efectuadas

NOMBRE IMPUTADO	RUT	DIRECCION	COMUNA
CARLOS LUIS HERNÁNDEZ FUENTES CP-RGUA	17.501.901-4	Pasaje Las Totoras N° 1265	Villarrica.

Actuaciones efectuadas

Rancagua, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Los días 28 y 29 de marzo del presente, ante la sala del este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, integrada por el juez don Cesar Torres Mesías -quien presidió-, el juez don Sergio Allende Cabeza y la jueza doña Carolina Garrido Acevedo, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en causa RIT 721-2021, seguida en contra de **CARLOS LUIS HERNÁNDEZ FUENTES**, cédula de identidad N°17.501.901-4, 34 años, nacido el 16 de noviembre de 1989 en Rancagua, casado, chofer de locomoción colectiva, con domicilio en Villarrica, pasaje Las Totoras 1265, comuna de Villarrica, actualmente privado de libertad en el Centro penitenciario de Rancagua

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal adjunto don Maximiliano Ángel Puga, mientras que la asesoría letrada del acusado estuvo a cargo de la defensora penal pública doña Mabel Medina Pérez. Ambos intervinientes con domicilio y forma de notificación registrados en este Tribunal.

SEGUNDO: Acusación. El Ministerio Público acusó en los siguientes términos:

“El imputado, a lo menos durante el mes de abril del 2021, mantuvo sin autorización que lo permitiera un arma de fuego en su domicilio, en su casa habitación,

en un departamento ubicado en calle Río Las Leñas N° 01381 departamento 103 de la villa Las Cumbres en Rancagua. Ahí mantenía de manera ilegal una pistola marca Zoraki 925, de calibre de 9 milímetros, con su respectivo cargador, la pistola era a fogeo y la misma se encontraba modificada y adaptada para el disparo.

Es así como el día 16 de abril de 2021, alrededor del mediodía, mediando una autorización judicial la policía ingreso hasta dicho domicilio, ahí se encontraba el imputado y en una dependencia en la cocina se encontraba dicho armamento y en su habitación había una munición cuyo calibre hasta ahora se desconoce”. (sic)

Calificación jurídica, grado de desarrollo, autoría y participación.

El Ministerio público imputó al acusado, ser autor ejecutor, del delito de **porte ilegal de arma de fuego prohibida**, prescrito y sancionado en artículo 13 inciso 1° en relación con el artículo 3° incisos 1° y 3° de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, el que encuentra en grado de consumado.

Circunstancias Modificadorias de la Responsabilidad Penal.

A juicio de la Fiscalía, no concurre ninguna modificatoria.

Solicitud de pena.

El Ministerio Público solicitó, por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, la sanción de **5 años de presidio menor en su grado máximo**, más las penas accesorias y las costas de la causa.

TERCERO: Alegaciones de los intervinientes. El Sr. Fiscal, planteó que en el transcurso de la audiencia el tribunal podrá verificar lo ocurrido el día de los hechos, a través del testimonio de un funcionario de Carabineros. La investigación comienza con la denuncia de algunas personas en relación con que el acusado poseía armas de fuego, por lo que se solicitó la respectiva orden de entrada y registro, a través de la cual se ingresó al domicilio del acusado y se encontró el arma referida en la acusación, cuya propiedad para el disparo se determinó a través de una pericia.

A su turno, la Sra. defensora señaló que el momento del ingreso al domicilio había otra persona. Además, el domicilio no es el lugar en que residía el acusado, pues este a la fecha de los hechos vivía en otro domicilio junto a su cónyuge. Adicionalmente, se discutirá la existencia de prueba obtenida de manera ilegal, pues fue sacada de la plataforma Facebook de forma ilegal.

En sus **alegatos de clausura ambos intervinientes se mantuvieron en sus posiciones iniciales.**

El Sr. Fiscal señaló que se acreditó el delito. Insistió en que la Sección de Investigación Policial de Carabineros se nutre de mucha información que a veces

proviene de vecinos. En este caso se trata de información que deriva de dirigentes vecinales. Es información que proviene de inteligencia policial. Esa información tiene que ser corroborada por otros antecedentes que en este caso existen. Indica que al efectuar la denuncia se señala que hay un vecino que efectúa disparos y tiene armas de fuego y que se puede ubicar en un domicilio determinado. Además, las personas aportan imágenes desde la red social Facebook del perfil del imputado, en las que aparecen armas de fuego y municiones. En virtud de lo anterior, se obtiene una orden de ingreso y se encuentra el arma en la cocina de la vivienda. La munición se encuentra debajo del colchón donde se encontraba el mismo acusado y se trata de la munición que logró ser utilizada en la prueba de disparo, una munición modificada. Esa munición fue objeto de prueba y está apta para el disparo. El perito indica que el arma tenía otra característica, podía ser utilizada manualmente o semiautomática. Se trata de un arma bastante peligrosa. Por último, también se incorporó una pericia que dio cuenta de la utilización del arma.

Recalcó que se trata de un arma de fuego prohibida y que es irrelevante si este era o no el domicilio del acusado, porque se trata de un domicilio que frecuentaba, era el domicilio de su amante, por eso pudo ser identificado en ese domicilio.

Sobre las imágenes, dijo que fueron obtenidas en un perfil público, de modo que no existen expectativas de privacidad. Las imágenes fueron proporcionadas por civiles. No hay un trabajo de los funcionarios policiales que pudiera infringir alguna garantía del acusado.

A su turno, la Sra. defensora insiste en la absolución. Indicó que el funcionario policial fue claro al señalar que en el domicilio se encontraban dos personas. Se estableció que no era el domicilio de su representado, quien desconocía la existencia del arma en el lugar. Sobre lo dicho por el funcionario policial, señaló que el mismo reconoció que no existe ningún registro de cuántos vecinos eran quienes efectuaron la denuncia ni en qué fecha la hicieron, solo los vecinos singularizan a Carlos y aportan las imágenes. Sin embargo, al preguntarle si dejan registro de la entrega de las imágenes, no fue capaz de decir si lo habían consignado, pero carabineros tiene la obligación de dejar un registro y al no hacerlo afectan el derecho de defensa de su defendido.

Respecto de las imágenes de Facebook indica que se está afectando la privacidad de su defendido, porque una de las imágenes sólo estaba habilitada para ser vista por sus amigos.

Por otra parte, en el mismo informe que entrega carabineros ellos indican que él vivía en un domicilio distinto, en el mismo documento de la autoridad fiscalizadora se indica que su defendido tiene otro domicilio que está ubicado en calle Río Las Leñas.

De este modo, el arma pudo ser de la otra habitante del inmueble. No se le puede asignar a su defendido la conducta, si él ni siquiera tuvo el arma en su poder.

En su réplica, el Sr. Fiscal indica que lo que existió fue información de dirigentes vecinales y el registro está en los informes.

Sobre el domicilio que el acusado registra en el biométrico, indicó que una persona puede tener un domicilio distinto del biométrico, pero fundamentalmente, el domicilio en que fue encontrado él y el arma era un domicilio que frecuentaba. Había una persona que era su amante, lo que permite establecer su permanencia en ese lugar. Luego respecto de la vinculación del arma al acusado, dijo que el sector era un lugar complicado en que se cometían delitos con armas de fuego y los dirigentes sindicaron al acusado como uno de los responsables de esta peligrosidad del barrio.

Finalmente, la Sra. defensora reiteró que en los registros de carabineros no se deja constancia del número de personas, sexo y día en que se presentan a proporcionar la información.

CUARTO: Actitud del acusado. Al ser informado de sus derechos durante el juicio oral, el acusado decidió declarar y dar su versión sobre los hechos que se le imputaron en la acusación.

CARLOS LUIS HERNÁNDEZ FUENTES, relató que ese día había peleado con su esposa, no recuerda el día exacto. Llegó al departamento de su amante. A ese departamento entraba y salía gente. Estaban ahí y llegó carabineros.

A las preguntas del Sr. Fiscal, dijo que su amante se llamaba Priscila, tenía 23 años y él 29 o 30. No era tan frecuente que visitara el domicilio, porque vivía con su esposa.

El domicilio de su amante estaba ubicado en un primer piso en villa Las Cumbres, cuando entra carabineros él estaba en el dormitorio con ella. No sabía que el arma estaba ahí, no era de él. Había llegado la noche anterior a quedarse con ella y carabineros llegó en la mañana. Había llegado al lugar como a las dos de la mañana.

Sobre la ocupación de Priscila, dijo que vendía cosas, matutes, no tenía lugar de trabajo determinado.

Sobre la existencia de un perfil de Facebook asociado a él, dijo que lo tenía en esa época, que estaba asociado a su nombre, pero con K. Tenía allí fotos familiares, no subió fotos con armas de fuego según sabe. No sabe si su perfil era público o privado.

A las preguntas de la defensa, dijo que su cónyuge se llama Valeria, se casó con ella en el año 2018 y tienen una hija.

Sobre el conocimiento de su señora de la relación extramarital, dijo que no lo sabía hasta el momento en que ocurrieron estos hechos.

Sobre la periodicidad en que visitaba el domicilio de Priscila, dijo que iba cuando discutía, cuando peleaba con su esposa. Insiste en que la Priscila era joven y se hacían fiestas a menudo en su casa. En el lugar había hartas balaceras, incluso hubo un homicidio en Edmundo Cabezas. No era un sector tranquilo.

Sobre tenencia de armas, dijo que nunca ha tenido armas inscritas.

Sobre con quiénes ha vivido además de su cónyuge, dijo que también vivió con su madre.

Sobre la forma en que ingresa carabineros, dijo que escuchó el golpe de la puerta, vio y entraron violentamente.

Sobre el número de funcionarios que ingresaron, dijo que fueron más de 15, él estaba acostado desnudo con Priscila.

Sobre lo que hizo carabineros, dijo que lo redujeron y le preguntaban dónde estaban las armas, las drogas y el dinero. También le preguntaban lo mismo a Priscila. Al rato después le dijeron que estaba detenido por una pistola que habían encontrado en el lugar. No le preguntaron si vivía en el lugar. No había ninguna especie personal de él. Andaba con un short plomo y una sudadera celeste. No tenía en el lugar otras pertenencias.

QUINTO: Análisis de la declaración del acusado. De la sola lectura de la declaración prestada en juicio por el acusado, es posible concluir que controvierte los elementos que forman parte de los hechos imputados. Sin embargo, reconoce haber sido detenido por funcionarios de Carabineros en el mismo domicilio en el que fue encontrada el arma de fuego y señala que su permanencia en el mismo se debe a que es el domicilio de su amante.

SEXTO: Prueba de cargo. Se rindió por parte del persecutor prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba.

La primera consistió en el testimonio del funcionario de Carabineros **Fabián Alexander Castillo San Martín**.

A su turno, la pericial consistió en la incorporación de las pericias balística y química por parte de los peritos **Mario Humberto Mora Arauco** y **Ruth Karen Álvarez Yáñez**.

La prueba documental y los otros medios de prueba, consistieron en la

incorporación de los siguientes documentos: 1) Informe de la autoridad fiscalizadora N° 6442/4866/2021; 2) Orden escrita de autorización de entrada y registro; 3) set de 3 fotografías del domicilio investigado; 4) set de 12 fotografías del interior del domicilio del imputado, arma encontrada y munición; 5) set de 3 fotografías adjuntas al informe pericial armero 262-2021; 6) set de 8 fotografías adjuntas al informe pericial armero 262-2-202y 7) set de 4 imágenes o capturas de pantallas del Facebook del imputado recogidos por funcionarios policiales de Carabineros.

Por su parte, la defensa incorporó únicamente prueba testimonial, consistente en el testimonio de doña **Susana Solange Fuentes González**.

SÉPTIMO: Acusación y elementos del tipo penal. El Ministerio Público imputó autoría al acusado en un delito de porte de arma de fuego prohibida. Tal ilícito, se encuentra descrito en el artículo 13°, en relación con el artículo 3°, de la Ley 17.798 sobre Control de Armas. La primera de las normas citadas sanciona a quienes "... poseyeren o tuvieran alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3°". La remisión que la norma anterior realiza artículo 3, dice relación con las armas de fuego prohibidas, dentro de las cuales se encuentran las armas a fogueo modificadas.

De esta forma, lo que este tipo penal sanciona, es la posesión y tenencia de un arma de fuego que reúna las características señaladas en el artículo 3 de la referida Ley.

Entonces, para la configuración del tipo penal imputado debían acreditarse los siguientes elementos: 1) la posesión o tenencia de un arma de fuego y 2) que la referida especie tenga alguna de las características descritas en el artículo 3 de la Ley citada, que la hagan encuadrar dentro de la categoría de arma prohibida.

OCTAVO: Hipótesis de las defensas frente a la acusación. Cabe considerar, que frente a la imputación del Ministerio Público la defensa planteó una teoría alternativa respecto de la tenencia del arma de fuego encontrada en el domicilio, indicando que la misma no era de propiedad del acusado, quien no sabía de su existencia, dado que el inmueble en que fue encontrada no era su vivienda, sino que pertenecía a su amante de nombre Priscila y se trataba de un inmueble en el que entraba y salía mucha gente y se realizaban constantemente fiestas.

NOVENO: Convenciones probatorias. No se acordaron.

DÉCIMO: Cuestiones previas. Atendiendo a las alegaciones formuladas por la defensa desde su alegato de apertura, antes de entrar al análisis de la prueba conviene hacerse cargo de tales alegaciones, pues ellas inciden en la legalidad de la prueba presentada al juicio oral.

En primer lugar, se cuestionó la forma en que se dio comienzo a la investigación, pues según se dijo los funcionarios policiales incumplieron con la obligación de registro al no consignar la identidad de las personas que efectuaron la denuncia, ni su número, sexo y la fecha precisa en que entregaron la información.

Respecto de dicha objeción, lo que advirtió el tribunal fue, por el contrario, que la obligación de registro fue debidamente cumplida, pues según el relato del funcionario policial dicha información fue consignada en dos informes policiales. Si bien, según pudo apreciar del mismo testimonio, en los informes no se indica el nombre de las personas que proporcionan la información, su número, su sexo, ni el día preciso en que la otorgan, lo cierto es que el funcionario fue claro al señalar que la información fue aportada de forma anónima, pues las personas temían sufrir represalias de parte de la persona a la que estaban denunciando, lo que resulta bastante comprensible, atendido el contenido de la denuncia, pues se sindicaba a un sujeto, con nombre, apellido y dirección, que posee armas y que efectúa disparos en la vía pública. A lo anterior, es necesario agregar que quienes denuncian son vecinos del sector, de modo que son personas fácilmente ubicables por parte del denunciado.

Debido a lo anterior, resulta absolutamente razonable que se omitan las identidades de los denunciantes y en cambio solo se indique que se trata de dirigentes vecinales, sin indicación de su número y sexo, pues estos datos también podrían servir para identificarlos. Respecto de la fecha en que los policías reciben esta información, lo relevante para la investigación y para las diligencias efectuadas a partir de la denuncia, es que la información haya sido registrada en los informes policiales, que por cierto tienen una fecha determinada.

A juicio de estos sentenciadores, la obligación de registro se encuentra suficientemente cumplida con la diligencia efectuada por los funcionarios policiales al confeccionar dos informes policiales en los que se consigna el contenido de la información recibida y se indica en forma genérica, el origen de dicha información.

Debe agregarse a lo anterior que, tal como señala el funcionario de carabineros que declara durante el juicio, es una práctica común que personas se acerquen a funcionarios policiales a realizar denuncias de todo tipo e incluso a entregar información de manera informal, pues la policía tiene precisamente, dentro de sus labores ordinarias acoger denuncias y esa es una de las formas más comunes en que se inician las investigaciones policiales. En ese contexto, resulta también normal que quienes efectúan una denuncia no quieran revelar sus identidades, pues en general la

forma en que toman conocimiento de los hechos se debe a que habitan domicilios cercanos, lo que los hace fácilmente identificables y los expone a represalias.

Finalmente, resulta necesario señalar que las denuncias anónimas no se encuentran prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico, muy por el contrario, en algunos casos incluso ese tipo de denuncias son incentivadas, existiendo números telefónicos a disposición de la ciudadanía para efectuarlas. Lo que resulta relevante, en estos casos de denuncias anónimas, es, por una parte, que se deje registro de la denuncia y su contenido; y por otra, que la actuación policial no se base únicamente en esa información proporcionada de forma anónima. En el presente caso, ambas obligaciones fueron cumplidas. Como ya se dijo, la obligación de registro se cumplió a través de los informes policiales en los que se dejó constancia de la información obtenida y de la forma en que se obtuvo. Por otra parte, se evidenció que la información dio origen a actuaciones policiales que culminaron con la petición de orden judicial para el ingreso al domicilio de la persona denunciada, la que no fue pedida con la sola denuncia, pues lo más probable es que no habría sido concedida con esa escasa información, sino con la verificación de la identidad del denunciado a través del informe biométrico y de las capturas de pantalla del perfil de Facebook del denunciado, las que fueron proporcionadas en forma posterior por los mismos denunciantes y de las que se obtuvo información que sirvió para corroborar la denuncia.

Otro asunto que fue objetado por la defensa es precisamente la obtención de las imágenes del perfil de Facebook del acusado, pues se argumentó que se trata de información privada, lo que hace dicha prueba sea ilícita y no deba ser considerada para adoptar una decisión en este caso.

Lo primero que se dirá en el presente caso, es que ni siquiera resultó probado el elemento básico de dicha alegación, esto es, que el perfil del acusado o algunas de las imágenes que fueron exhibidas en juicio, tuvieran el carácter alegado por la defensa. De las solas imágenes incorporadas no queda claro si el perfil y/o las imágenes eran de acceso público o su contenido estaba reducido a los amigos del titular de dicho perfil. Por otra parte, la defensa no rindió prueba alguna para acreditar dicha alegación, por el contrario, el propio acusado al ser consultado por ese punto se limita a señalar que no sabe si su perfil de Facebook es público o privado.

El motivo expresado en el párrafo anterior resulta, a juicio de estos sentenciadores, suficiente para el rechazo de la alegación, pues la privacidad del perfil y/o las imágenes publicadas es el fundamento básico de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, resulta conveniente referirse al fondo de la alegación, que dice relación con la

imposibilidad de utilizar la información contenida en redes sociales cuando esa información está contenida en un perfil privado o esa información en particular ha sido publicada con acceso restringido, a pesar de tratarse de un perfil que en general es público.

El punto anterior está relacionado con el derecho a la privacidad y la existencia o no de una expectativa legítima de privacidad cuando se trata de publicaciones realizadas en redes sociales. Sobre el punto, es necesario considerar distintos elementos que deben ser evaluados en conjunto. En primer lugar, resulta relevante para la decisión del asunto probar que el perfil creado por el usuario es un perfil privado, o bien, que siendo un perfil público su titular ha decidido restringir el acceso a determinada información compartiéndola solo con sus contactos o con algunos de ellos, pues de lo contrario, si la información ha sido compartida sin restricciones, se entiende que ha renunciado a su derecho a la privacidad respecto de la información que ha sido publicada de esa forma.

Luego, establecido que la información ha sido compartida con restricciones, resulta necesario analizar si en el caso concreto existe una legítima expectativa de privacidad, para lo cual es necesario atender, según lo explica el profesor Javier Escobar a dos elementos, primero, uno subjetivo, esto es, la persona debe albergar una expectativa subjetiva de privacidad y, en segundo lugar, uno objetivo, dicha expectativa debe ser considerada legítima o razonable por la sociedad¹. En este caso obviaremos la primera discusión, porque ya dijimos que no se probó el carácter privado de la información, y además ha sido el propio acusado quien al ser preguntado por la privacidad de su perfil de Facebook ha dicho que no sabe si era un perfil público o privado, demostrando con ello una carencia de dicho elemento subjetivo, pues con su respuesta demuestra que parece serle indiferente tal aspecto. Luego, respecto del elemento objetivo, nos encontramos ante un caso claro en que, dada la naturaleza de la información que ha sido compartida, la cual alude a la comisión de un hecho ilícito, no parece que la sociedad esté dispuesta a considerar legítimo o razonable albergar una expectativa de privacidad respecto de dicha información, es decir, si alguien publica en redes sociales que ha cometido, está cometiendo o se apresta a cometer un delito, la sociedad no parece estar dispuesta a que dicha información sea mantenida en privado, por más que la intención del sujeto sea que la referida información solo sea conocida

¹ Escobar, Javier. Redes sociales y expectativa legítima de privacidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena. Revista Chilena de Derecho y tecnología, Vol. 12 (2023). <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2023.69893>.

por un grupo reducido de personas, y sobre todo que la misma no llegue a las autoridades, en particular la policía, pues en tal caso, como ocurre en autos, existen intereses superiores que permiten sostener que la expectativa de privacidad del agente no es legítima.

En base a todas las consideraciones antes expresadas, el tribunal decidió desestimar las alegaciones de la defensa y, en consecuencia, valorar toda la prueba de cargo que ha sido presentada a juicio, por estimar que no existe ninguna ilicitud en su obtención.

UNDÉCIMO: Prueba rendida y hechos probados. Las pruebas presentadas por el persecutor, que fueron incorporadas en el marco del juicio oral, constituyen los elementos de juicio que corresponde valorar al Tribunal, para determinar si las hipótesis proporcionadas por los intervinientes sobre los hechos se encuentran respaldadas por tales elementos.

Para establecer la hipótesis de cargo respecto de la forma en que ocurrieron los hechos y del hallazgo de las especies en poder del acusado se contó con el testimonio del funcionario carabineros que participó en la entrada y registro de la vivienda y posterior detención del acusado.

Fabian Alexander Castillo San Martín, funcionario de la Sección de Investigación Policial de Carabineros, relató que el año 2021 trabajaba en la referida sección y el día 16 de marzo del mismo año un funcionario confeccionó un informe en el que daba cuenta que vecinos de la población Villa Las Cumbres denunciaban a un sujeto que tenía su domicilio en el Pasaje Las leñas, identificado como Carlos Hernández Fuentes. Se consultó al sistema biométrico en el que se verificó que el sujeto tenía antecedentes por otros delitos como violencia intrafamiliar y homicidio. Se enviaron los antecedentes a la fiscalía. Luego se confeccionó un informe ampliado, al que se adjuntan antecedentes en los que se indica que los vecinos habían obtenido de Facebook imágenes en las que se observa a la persona con un arma de fuego y distinta munición sobre una mesa. Con estos antecedentes se solicita orden de entrada y registro al inmueble. El día 15 de abril se entrega la orden y se ejecuta el día 16. Al ingresar al domicilio encuentran bajo una cama una munición y junto a una cocina a gas una pistola marca Soraki, modelo 925 y se identifica al imputado como Carlos Luis Hernández Fuentes, quien fue detenido y pasado a control de detención.

Reitera que la información provino de personas que vivían en el sector, eran dirigentes vecinales que debido a constantes disparos y heridos comenzaron a recopilar antecedentes y los entregaron, pero permanecieron anónimos por temor a represalias.

Indicó que trabajando en la unidad SIP es común recibir de las personas antecedentes referidos a distintos delitos.

Durante su declaración se le exhiben las imágenes correspondientes a los sets de fotografías ofrecidos en las letras b) y c1) y c2) (en la acusación existió un error y la letra c) se encuentra duplicada, por lo que se optó por identificar los grupos de imágenes como c1) y c2) del auto de apertura, las que son reconocidas y descritas por el deponente en el siguiente sentido: Set b): 1) block 01381 de villa las Cumbres; 2) departamento de Carlos Luis Hernández fuentes y 3) puerta de acceso al departamento. Las imágenes fueron tomadas por el cabo Mauricio Peñaloza. Set c1): 1) perfil de Carlos Hernández como se identificaba en Facebook. La imagen corresponde a uno de los informes. Se trata de un perfil abierto al público; 2) imputado en una bañera con un menor; 3) imputado junto a otro sujeto al interior del departamento con armas de fuego en sus manos y 4) armas de fuego municiones y cargadores. Una de las armas de la imagen es la que fue encontrada en el domicilio. Set c2): 1) ingreso al departamento; 2) acceso al departamento 103; 3) interior del departamento, donde se ve la cocina; 4) al interior de la cocina fue hallada el arma; 5) lugar donde ese encontró el arma al costado de cocina a gas; 6) arma encontrada, marca Soraki. Se parece a las que se ve en la captura de Facebook; 7) misma arma; 8) acceso a dormitorio del departamento; 9) cama y proyectil; 10) lo mismo; 11) munición.

Agrega que en el departamento había además una mujer a la que le hizo control de identidad y luego se retiró. El imputado fue detenido y el arma fue incautada.

A las preguntas de la defensa, dijo que en esa fecha estaba como jefe de la unidad cuando se efectuaron las diligencias previas por lo que vio los informes. Reiteró que la denuncia se efectuó por dirigentes vecinales. Indicó que normalmente cuando se trabaja de civil, las personas acuden, pero no entregan su identidad por miedo a represalias.

Sobre si dejó registro del día en que acudieron las personas y cuantas fueron, dijo que ese registro es el que está estampado en el primer informe de fecha 13 de marzo de 2021. Luego ese informe fue ampliado conforme a otros antecedentes también entregados por vecinos. No quedó otro registro además de esos informes. Allí se habla solo de dirigentes vecinales.

Sobre el perfil biométrico acompañado al informe dijo que se obtuvo por los antecedentes proporcionados por los denunciantes, dado que ellos dan el nombre y dirección del sujeto. Los vecinos dijeron que esa persona vivía en el domicilio. Ellos viven en el lugar y lo ven entrar y salir del inmueble.

Sobre el registro del hecho de ser el imputado el propietario del domicilio, dijo que no hay registro y tampoco lo hay sobre quién era el propietario del inmueble.

Sobre la existencia de registro en relación al domicilio del acusado, dijo que no hay más registros que los mencionados y que fue detenido en ese domicilio, pero no puede dar fe de que él era el propietario del mismo, puede ser también arrendatario.

Sobre el momento de la detención, dijo que no recuerda haber encontrado otros objetos pertenecientes al acusado.

Sobre la existencia de alguna boleta de gas o luz para corroborar de quién era ese domicilio, dijo que no recuerda haberla encontrado.

Sobre el motivo por el que detienen al acusado y no a la mujer, dijo que era el sindicado como la persona que mantenía armas de fuego.

Sobre una de las imágenes señaladas en las que aparecían las armas, dijo que no recuerda que fuera privada.

Sobre el lugar en que fue encontrado el acusado, dijo que ellos entraron después del ingreso del Gope, por lo que no sabe en qué lugar específico estaba el acusado, pero cuando él ingresa el acusado estaba en el dormitorio junto a la mujer, no sabe si estaban acostados o de pie.

Sobre la mujer encontrada en el lugar, reitera que recuerda que ella se fue del lugar y que no se dejó registro de ello.

La declaración antes referida, unida a las imágenes que fueron exhibidas al deponente fueron suficientes, a juicio del tribunal, para tener por probado que el día 16 de abril del año 2021 el acusado fue encontrado en el interior de un departamento ubicado en calle Río Las Leñas N° 01381 departamento 103 de la villa Las Cumbres en Rancagua. En el mismo inmueble, específicamente en la cocina, al costado de una cocina a gas se encontró una pistola marca Zoraki 925, de calibre de 9 milímetros, con su respectivo cargador, la pistola era a fogueo, pero se encontraba modificada y adaptada para el disparo y en un dormitorio de la vivienda, debajo de la cama, se encontró una munición compatible con el arma incautada.

Debe indicarse que, si bien, se trata de una sola declaración, la misma fue corroborada por las imágenes exhibidas, en particular las descritas en el apartado c)2, referidas al ingreso al domicilio el día 16 de abril del año 2021, en las cuales el tribunal pudo apreciar directamente el lugar en que fue encontrado el acusado y el arma incautada, las que resultaron concordantes con la descripción proporcionada por el deponente.

Adicionalmente, es necesario considerar que la presencia del acusado en el

domicilio y el hallazgo del arma fueron hechos no controvertidos por la defensa, es más el propio acusado al prestar declaración confirmó ambos hechos indicando que se encontraba en el domicilio acostado cuando irrumpen los funcionarios de Carabineros. Si bien indica que se trata de un inmueble que no corresponde a su domicilio, agrega que se encontraba en el lugar porque ahí vive su amante y ese día había pasado la noche en el lugar.

Luego, respecto de la vinculación del acusado con el arma incautada en el domicilio, que fue el punto controvertido por la defensa, el tribunal estimó probada dicha vinculación en base al testimonio del funcionario de carabineros antes referido y de las imágenes correspondientes a las capturas del perfil de Facebook del acusado, las que fueron también incorporadas a través del testimonio de dicho deponente y que corresponden a aquellas descritas en el apartado c)1 del auto de apertura.

En primer lugar, respecto del testimonio del funcionario Castillo San Martín, debe considerarse la forma en que se inicia la investigación que ha dado origen a la presente causa, pues el funcionario menciona que la investigación se inicia por la información que proporcionan vecinos del sector, que identifica como dirigentes vecinales, quienes sindicaron a una persona, señalando su nombre y su domicilio como un sujeto que posee armas de fuego, lo que les consta dado que de forma constante efectúa disparos con armas de fuego en la vía pública. Ante dicha información los funcionarios comienzan una investigación policial y confeccionan un informe en el que dan cuenta de la información recibida y anexan a él el perfil biométrico de la persona denunciada, Carlos Hernández Fuentes, acusado de autos. Luego, el mismo deponente menciona que las personas vuelven y aportan información obtenida desde el perfil de Facebook de Hernández Fuentes, acompañando fotografías en las que se ve al acusado, quien se encuentra registrado como Karlos Hernández, cuestión que el mismo reconoce al prestar declaración, reconociendo que tiene un perfil de Facebook y que en dicho perfil se identifica con su mismo nombre, pero escrito con K. En dos de las imágenes que fueron exhibidas aparecen una serie de armas y municiones que fueron publicadas por el mismo acusado en su perfil. El deponente señala que en base a lo anterior se confecciona otro informe policial, en el que se incorporan las imágenes y con el cual se pide una orden de entrada y registro al domicilio ubicado en calle Río Las Leñas, block 01381, departamento 103, villa Las Cumbres de la comuna de Rancagua, la que es concedida por el juez de turno, según menciona en su declaración y según se consigna en uno de los documentos incorporados que corresponde a la resolución dictada con fecha 15 de abril de 2021 por el juzgado de garantía de Rancagua en la causa Rit N°

2141-2021.

Esta información proporcionada por los denunciantes y consignada en los dos informes policiales es el primero de los elementos que tuvo el tribunal en consideración para vincular al acusado con el arma hallada en el domicilio en el que fue encontrado el día 16 de abril de 2021, pues es necesario considerar que no se trata de una denuncia indeterminada respecto de una persona que posee armas de fuego y las utiliza en la vía pública, sino de una denuncia en la que se proporcionan antecedentes precisos respecto de la identidad de la persona y del domicilio que habita o frecuenta. Lo importante de esta información, es que permite a los funcionarios de carabineros iniciar la investigación en contra del acusado, adjuntando antecedentes que luego les permiten solicitar una orden de entrada y registro al domicilio singularizado por los denunciantes. Lo segundo importante de esta información, es que al momento de ejecutar la orden de entrada y registro se confirman los dichos de los denunciantes, pues en el domicilio que ellos señalan es encontrado el sujeto al que ellos sindicaron como habitante del inmueble y también es encontrada un arma de fuego.

Luego, el segundo antecedente que permite vincular al acusado con el arma incautada son las imágenes de su perfil de Facebook, pues en las mismas es posible apreciar que tiene una vinculación con armas de fuego y municiones, pues dos de sus publicaciones consisten precisamente en imágenes de armas y municiones. En la primera imagen se ven alrededor de 40 municiones y en la segunda dos armas de fuego, cargadores y múltiples municiones. Sumado a lo anterior, el funcionario policial que participó en el procedimiento y tuvo a la vista el arma de fuego encontrada en la vivienda, señaló que la misma es similar a una de las armas que aparecen en las imágenes obtenidas desde el perfil de Facebook del acusado, en lo que también coincidió el perito balístico cuando le fue exhibida la imagen. Si bien, ese testimonio de los funcionarios no es suficiente para establecer que el arma incautada sea la misma que aparece en la imagen, se trata de otro antecedente más, que unido a todos los antecedentes probatorios antes referidos, sirve para vincular al acusado con el arma incautada en el domicilio en el que el mismo fue encontrado.

Finalmente, es necesario señalar un dato adicional, que dice relación con la presencia del acusado en el referido domicilio, pues una de las principales alegaciones de la defensa estuvo referida a señalar que no vivía en ese departamento, sino en otro distinto con su mujer. Sin embargo, es un hecho que el acusado fue encontrado en el domicilio junto a una mujer en una de las habitaciones de la vivienda, hecho que no fue parte de la controversia, sino por el contrario, el propio acusado reconoce su presencia

en el lugar y señala que se trata del domicilio de su amante, agregando que el día anterior había peleado con su cónyuge y por esa razón se encontraba en el inmueble. De este modo, lo que se advierte de los dichos del acusado es que, aun no siendo el departamento de villa Las Cumbres su morada, se trata de un lugar que frecuenta con regularidad, lo que también constituye un elemento que permite vincularlo al arma que es encontrada en su interior, pues siguiendo la tesis de la propia defensa no es un domicilio que visitara de forma excepcional, sino un lugar con el que también tiene un vínculo.

Finalmente, respecto del domicilio del acusado, el cual según la tesis de la defensa estaría ubicado en un lugar distinto, lo cierto es que la única prueba rendida para establecer tal hecho fue el testimonio de la madre del acusado doña Susana Solange Fuentes González, quien relató que su hijo fue detenido por encontrarse en un lugar donde consumían drogas. Se trata de una población que se llama Las Cumbres donde llegaban muchachos a consumir y a tomar alcohol. Recuerda que eso ocurrió en el mes de abril de 2022, pero en esa época él vivía con su esposa Valeria Tapia Cáceres. No recuerda hace cuánto tiempo estaban casados, cree que dos años, tenían un hijo común. Sobre el lugar en que su hijo fue detenido, dijo que nunca lo frecuentó ella. Sabe que él salía a consumir. Sobre las personas que vivían en ese domicilio, dijo que allí vivían varias personas, que no era el domicilio de su hijo, que él vivía en la villa Las Acacias en Rancagua, sector oriente. Le celebraron su cumpleaños en el departamento. Era un departamento de su esposa. Sobre el tiempo en que ella dejó de vivir con su hijo, dijo que la visitaba mucho, que son una familia bien unida. Sobre posesión o tenencia de armas por parte de su hijo, dijo que nunca lo vio con una y su hijo nunca le contó que las tuviera.

Dicho testimonio resultó insuficiente para establecer que el acusado, a la época de los hechos, viviera en otro domicilio distinto de aquel en el que fue encontrado, pues la deponente no demuestra tener un conocimiento acabado de aquello sobre que declara. No sabe la imputación que pesa sobre su hijo, no tiene conocimiento del domicilio en que se encontraba su hijo ni del motivo por el que estaba en el lugar, ni siquiera pudo señalar cuánto tiempo llevaba su hijo de casado y cuál era la dirección precisa de su domicilio, limitándose a señalar que se encontraba en la villa Las Acacias. Por otra parte, la defensa ni siquiera acompañó un certificado de matrimonio que avalara su teoría alternativa, de modo que ni siquiera fue posible establecer que el acusado efectivamente estuviera casado o tuviera una relación de convivencia, a la época de los hechos, con una persona diferente de aquella mujer que fue encontrada

junto a él en la vivienda el día 16 de abril de 2021.

Por otra parte, tal y como dijo el persecutor, lo cierto es que una persona puede tener más de una morada, de modo que ni siquiera resulta determinante, para efectos de la vinculación entre el acusado y el arma incautada, que Hernández Fuentes tuviera su domicilio en el inmueble en que fue hallada la especie, pues bien pudo haber tenido un domicilio diferente o incluso tener más de un domicilio. Por el contrario, lo relevante para la resolución del presente caso es que todos los antecedentes antes referidos no hacen más que vincular al acusado con el arma encontrada en el interior de la vivienda y por otra parte, sirven también para descartar la vinculación de la misma con la mujer que se hallaba ese mismo día junto al acusado y respecto de la cual no existe antecedente alguno que permita relacionarla con el arma de fuego encontrada en el lugar, pues no es ella la persona mencionada en la denuncia, como quien es vista disparando en la vía pública, no es su nombre el dado en la denuncia que da origen a esta causa y tampoco es quien publica fotografías con armas en sus redes sociales. Es más, la mujer que se encontraba junto al acusado ni siquiera es mencionada por el mismo como la poseedora o tenedora del arma del fuego, por el contrario, el acusado al prestar declaración atribuye la presencia de esa especie en el domicilio a que se hacen fiestas en el lugar y entra y sale mucha gente, lo cual parece improbable, pues resulta difícil creer que alguien que no vive en el lugar y lo visita de forma infrecuente, por ejemplo para una fiesta, dejara un especie de esa naturaleza olvidada en el lugar.

Ahora, **respecto de la aptitud para el disparo del arma y su carácter de arma prohibida** se recibió prueba pericial, consistente en el testimonio del perito balístico **Mario Humberto Mora Arauco**, funcionario de carabineros, quien relató que le correspondió efectuar el informe pericial balístico armas 262-2021 y 262-22021. Se le pide periciar una pistola marca Soraki, modelo 925 con su cargador y un cartucho balístico marca CBC, calibre punto 380 auto, el que fue rotulado como C1.

Respecto del análisis externo a la pistola, dijo que se trata de un arma tipo fogeo calibre 9 milímetros con su cargador, de origen turco. Mantiene un sistema de obturación de fábrica, el que el momento del examen no mantenía dentro del ánima del cañón y para ser retirado es necesaria la intencionalidad y utilizar algún tipo herramienta, debido a su ubicación y a que se encuentra conformado por una pieza metálica. Del mismo modo se advierte que la réplica posee un sistema de selección de tiro que aparte de mantener el seguro selecciona a sistema de disparo automático y semiautomático.

Sobre el análisis de la munición, dijo que corresponde a un cartucho convencional marca CBC de origen brasileño, en el que destacó un corte de la zona anterior, de la ojiva, el que reducía la longitud total del cartucho.

Luego se efectúan pruebas de disparo con el arma y el cartucho. Primero se hace con un cartucho de la sección, pero al ser introducido en la recámara de la pistola esta no cierra por completo y no puede dar inicio al ciclo del disparo. Luego se hace la misma prueba con el cartucho incautado, se advierte que mantiene una deformación en la zona media de la vaina lo que insinúa que este fue introducido en demasía en la vaina, fue empujado hacia el interior de la vaina, reduciendo su longitud total. Luego se hace un trabajo teórico práctico utilizando el cartucho incriminado con la pistola evidenciándose que este si puede introducirse.

Se efectúa una prueba de disparo con la pistola periciada y el cartucho incriminado con resultados positivos, obteniendo un proyectil balístico testigo.

Como conclusión de las pruebas se obtuvo que la pistola corresponde a una a fogueo modificada intencionalmente quedando apta para el disparo de cartuchos convencionales modificados para ser utilizados en esa arma.

Durante su declaración se le exhiben las imágenes ofrecidas en las letras d), e) y c)2 del auto de apertura, las que fueron reconocidas y descritas por el deponente: d): 1 imagen inicial que muestra la evidencia total a periciar, pistola, cartucho y cargador; 2) vista interna del anima del cañón; 3) selector de seguro y tiro y sistema de selector de automático. No se pudo verificar ese mecanismo, dado que solo se tenía un cartucho, pero el automatismo indica que la misma máquina de pistola efectúa el disparo. Sobre la capacidad de cartuchos del cargador, dijo que originalmente es para cartuchos a fogueo de 9 milímetros. Podrían entrar 15 cartuchos al cargador.

e) 1) Imagen inicial del informe con cartucho; 2) comparación del cartucho periciado con un cartucho de la misma marca y calibre y se ve la diferencia de la longitud total; 3) imagen con más detalle de la deformación de la zona media; 4) lo mismo con indicador; 5) trabajo teórico práctico utilizando primero el cartucho fiscal; 6) imagen que muestra que el cartucho fiscal no puede ser introducido al interior del cargador; 7) cartucho peritado y 8) se ve que al introducir el cartucho modificado se puede ingresar al cargador. Indica que se trata de modificaciones, tanto de cartucho como de pistola a fogueo que son comunes.

c)2: Se le exhibe la imagen de las pistolas. Dice que lo que se ve, la primera que se ve más clara hacia la esquina inferior izquierda y tiene bastante parecido a la pistola Soraki.

Finalmente, se escuchó el testimonio de **Karen Ruth Álvarez Yáñez**, perita bioquímica forense de Labocar Rancagua, quien relató que realizó una pericia para el informe 262, consistente en la determinación de iones nitritos asociados a la deflagración de la pólvora en un arma marca Soraki 9 milímetros. Se trataba de una pistola a fogeo modificada. Realizado el análisis el arma dio reacción positiva a la presencia de iones nitros, con lo que se concluye que el arma presentó iones nitritos asociados a la deflagración de la pólvora.

Finalmente, si bien no resultaba necesario en este caso, se estableció también la **ausencia de autorización para la posesión, tenencia o porte de armas de fuego o municiones**, para lo cual se incorporó el Oficio N°2341/621, de la Autoridad Fiscalizadora, en el que se indica que el acusado **Carlos Luis Hernández Fuentes** no registra armas inscritas a su nombre y no se encuentra autorizado para el porte o transporte de armas de fuego o municiones.

Como puede observarse, la prueba rendida resultó coincidente y alcanzó un alto grado de corroboración, lo que permitió dar por establecidos, con el estándar requerido en materia penal, los hechos de la acusación, respecto del hallazgo de un arma de fogeo marca Soraki, que se encuentra modificada y apta para el disparo de proyectiles balísticos convencionales, con su respectivo cargador, calibre 9 milímetros. Se estableció además que el acusado fue sorprendido en el mismo domicilio en el que fue hallada el arma de fuego antes referida, lo que unido al resto de la prueba rendida, a la que se ha hecho referencia pormenorizadamente en los párrafos anteriores, permitió establecer que dicha especie se encontraba bajo la tenencia del acusado.

DUODÉCIMO: Calificación jurídica. Los hechos antes descritos configuran el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, pues concurren todos los elementos que requiere la configuración del mismo. Dichos elementos, según se indicó en el considerando séptimo, la posesión, tenencia o porte de un arma de fuego, sus dispositivos o piezas y la posesión y que se trate de un arma reúne alguna de las condiciones que establece el artículo 3 de la Ley de Control de Armas, en este caso, dicha condición consiste en la modificación de un arma a fogeo, para permitir, como afirmó el perito, que proyecte municiones convencionales.

Adicionalmente, debe indicarse que en el presente caso se estableció que estamos en presencia de un hecho que, por sus características es idóneo para afectar el bien jurídico protegido, que en este caso es la seguridad de las personas. Primero, ha de reiterarse que las modificaciones introducidas por la Ley 20.813 a la Ley de Control de Armas, implicaron un cambio fundamental en relación al delito en estudio, pues se

abandonó la motivación del sujeto activo como un elemento determinante para la sanción y la determinación del quantum de la misma. En consecuencia, nos enfrentamos a un delito de peligro, en que el sujeto pasivo es indeterminado, pudiendo considerarse a la sociedad toda, en atención al bien jurídico protegido. Por más cuestionamientos que puedan generar, a nivel doctrinal, los delitos de peligro, en particular los de peligro abstracto, la naturaleza del ilícito no permite exigir para su configuración un resultado lesivo, una intención determinada del agente o una amenaza concreta a la seguridad de la población, pues de la propia historia de la Ley, del mensaje de la misma y sobre todo, de las distintas normas que en definitiva fueron aprobadas, es posible concluir que no es necesario exigir al sujeto activo una motivación especial para sancionar la tenencia de un arma de fuego, pues lo que se quiso castigar fue la mera tenencia de las mismas, con la finalidad de resguardar la exclusividad en el control de las armas por parte del Estado y la seguridad ciudadana, dado el alto poder de daño de las armas de fuego.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Exma. Corte Suprema, en particular en los autos rol N° 2743-2018, oportunidad en la cual fue incluso más allá, señalando que *“Del análisis de las normas en cuestión se desprende que **determinar la aptitud para el disparo del arma es un elemento de juicio más que pueden considerar los jueces para establecer la existencia de un arma de fuego, pero aquello no es un requisito del tipo penal...**En ese entendido resulta imposible coincidir con el recurrente sobre la existencia de una infracción al principio de lesividad al haber dudas sobre la aptitud para el disparo del arma en cuestión cuando también se encuentran sujetas a control sus partes y piezas, es decir, en el evento que la falla ocasionara la imposibilidad de salida del proyectil aquello no priva a sus partes, entre ellas el cilindro y el cañón, de constituir ilícito su porte, como correctamente se indica en el fallo. A mayor abundamiento, la certeza que reclama la recurrente alusiva a la aptitud de disparo pudiera tener cierta trascendencia al estar frente a un arma hechiza donde aquello es precisamente lo que la convierte en un elemento objeto de control de la ley de armas, pero no es el caso tratándose de un arma convencional construida precisamente con ese fin, respecto de la cual el informe técnico no constata ninguna modificación que impida el disparo, sino solamente un desperfecto que hace riesgoso su uso, **pero en caso alguno muta su naturaleza y hace su porte impune al no existir peligro de afectación el bien jurídico protegido, esto es, el control del orden público a través de la restricción al porte de armas de fuego**”.* (sic)

Por otra parte, en el presente caso, resultó suficientemente establecido que el arma de que se trata tenía capacidad de disparo, lo que fue probado a través de la pericia balística incorporada por el persecutor. También se estableció, del relato de la perita química, doña Ruth Álvarez, que el arma fue disparada.

De esta forma, fue posible determinar en concreto, que el arma de que se trata estaba en condiciones de afectar el bien jurídico protegido.

Por otra parte, es necesario también considerar que, en el presente caso, el arma fue hallada junto a un cartucho compatible con la misma, de modo que, si bien no estaba en condiciones de ser percutida de forma inminente, si podía ser utilizada en un tiempo cercano, con el riesgo cierto que eso genera para la seguridad, integridad y vida de las personas.

DÉCIMO TERCERO: Pena aplicable. En el presente caso no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, por el cual se decidió condenar al acusado, se encuentra sancionado en el artículo 13° de la Ley 17.798, que establece una pena de **presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo**, la que en este caso será aplicada en su grado inferior, pues el tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 B de la Ley 17.798, se encuentra facultado para recorrer la pena en toda su extensión y se estima que dicha sanción resulta proporcional al injusto, considerando que el arma fue encontrada sin municiones en su interior, lo que permite concluir que no estaba en condiciones de ser percutida de forma inminente, lo que ciertamente disminuye el riesgo.

DÉCIMO CUARTO: Forma de cumplimiento. En el presente caso el sentenciado no reúne los requisitos que hacen procedente el otorgamiento de una sanción sustitutiva, pues registra en su extracto de filiación y antecedentes, entre otras sanciones, una condena no prescrita a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de homicidio, dictada con fecha 26 de abril de 2016 y cumplida el 17 de octubre de 2018.

Sin perjuicio de lo anterior, para el cumplimiento de la pena corporal, le servirá de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad en la presente causa, que corresponde a 360 días, según el certificado del Jefe(s) de la Unidad de administración de Causas de este tribunal.

DÉCIMO QUINTO: Costas. Se eximirá al sentenciado del pago de las costas, al haber sido representado por la Defensoría Penal Pública y en atención a lo expuesto en el inciso primero del artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, en relación

con el inciso primero del artículo 36 de la ley N° 19.718, sin que concurra la hipótesis de excepción a que se refiere su inciso segundo, conforme lo autoriza el inciso final del artículo 47 del Código Procesal Penal. Por lo demás, al encontrarse el condenado privado de su libertad se puede presumir fundadamente que carece de los recursos económicos para soportar el pago de las costas, tal como se establece en el artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 25, 26, 29, 50 y demás normas pertinentes del Código penal; 47, 295, 296, 297, 340, 342, 344 y 348 del Código procesal penal; 3, 13, 15 y 17 B de la Ley 17.798, se declara que:

I.- Se **condena**, a **CARLOS LUIS HERNÁNDEZ FUENTES**, a la pena de **tres años (3 años) y un día** de presidio menor en su grado máximo, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 13° con relación al artículo 3, todos de la Ley 17.798; detectado el día 16 de abril de 2021, en la comuna de Rancagua.

Conforme lo establecido en el considerando décimo cuarto, la pena corporal deberá ser cumplida de forma efectiva.

Se deja constancia que el sentenciado **registra un abono de 360 días**, correspondiente al tiempo que permaneció privado de libertad en la presente causa.

II.- Se decreta el comiso del arma de fuego y la munición incautada en este proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 17.798.

III.- Atendido lo razonado en el considerando décimo quinto, no se condena en costas al acusado.

Una vez ejecutoriada esta sentencia y dentro del plazo legal respectivo, ofíciase al Servicio Electoral a fin de comunicar que el sentenciado de autos, fue condenado por un delito que merece pena aflictiva, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 inciso 2° de la Ley 18.556, modificada por la Ley 20.568.

Se deja constancia que para los efectos de la publicación de esta sentencia en el sitio web del Poder Judicial no existen datos que reservar.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redactó la jueza Carolina Garrido Acevedo.

RIT N° 721-21

RUC N° 2100254341-6

Dictada por la sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, integrada por los jueces titulares, don Cesar Torres Mesías don Sergio Allende Cabeza y doña Carolina Garrido Acevedo.


Lectura de sentencia:

RUC	RIT	Ámbito afectado	Detalle del Hito	Valor
2100254341-6	721-2021	RELACIONES.: HERNÁNDEZ FUENTES CARLOS LUIS / POSESIÓN TENENCIA O PORTE DE ARMAS SUJETAS A CO	-	-
		PARTICIPANTES.: Fiscal. - MARIÁNGEL PUGA MAXIMILIANO NORBERTO	-	-
		PARTICIPANTES.: Defensor. - MEDINA PÉREZ MABEL CAMILA	-	-
		CAUSA.: R.U.C=2100254341-6 R.U.I.=721-2021	-	-

Dirigió la audiencia y resolvió - **CAROLINA GARRIDO ACEVEDO.**

Todos los archivos > Respaldo de Audios > 2021 > 721-2021 > Juicio oral >

☐ Nombre ▾

 2100254341-6-1071-240305-01-01-Lectura de Sentencia, CGA.mp3